

CENSO INDIGENA NACIONAL

Los problemas suscitados por la falta de una política efectiva —de parte del Estado— que tuviera por fin lograr la integración en la Comunidad Nacional de los indígenas existentes en distintas partes del país, no podían ser abordados con eficacia sin que se adoptaran recaudos previos que aseguraran el éxito de cualquier esfuerzo en procura de la definitiva solución de estos. Ello se logrará a través de una planificación del desarrollo de los grupos aborígenes, por medio de un adecuado tratamiento de las facetas que presenta el fenómeno de transculturación de los mismos por la cultura tecnificada del hombre blanco.

Para esto, durante muchos años se había contemplado la necesidad de realizar un amplio relevamiento censal que permitiera obtener los datos necesarios para realizar la experiencia de puesta en funcionamiento de plantas pilotos, que permitieran obtener una visión correcta de las posibilidades de realizar la incorporación de los indígenas a la vida nacional por medio de una serie de etapas de integración, fundamentadas en mejoras progresivas del standard económico de los grupos indígenas, y fomentando en muchos de ellos las posibilidades culturales y sociales de un mayor arraigo al medio, eliminando la transhumancia o el desplazamiento constante, que en muchas zonas impedía toda política concertada con posibilidades de éxito.

Estas premisas fundamentales han sido contempladas en el Decreto 3998/65 del P. E. Nacional que dispone la realización de dicho censo a partir del 1º de Agosto del corriente año, debiendo el relevamiento prolongarse hasta fines de marzo de 1967. Este Decreto fue promulgado el 27 de mayo ppdo y dado a conocer oficialmente en la sesión de clausura de la 1ª Convención Nacional de Antropología, 2ª parte, realizada en Resistencia (Prov. del Chaco). Por el mismo se contemplan los aspectos demográfico-sociales, encuadrados en el marco etnológico, del problema indígena en el país, que exige para su futura solución un correcto planteo técnico y científico.

Para la organización de las tareas censales ha sido designada una Comisión Ejecutiva, integrada por el Director Nacional de Asuntos Indígenas, R. P. Dr. Emilio Antonio Martínez; el Director del Museo Etnográfico e Instituto de Antropología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor Enrique Palavecino; y el Director del Instituto Nacional de Antropología, Profesor Julián Cáceres Freyre. Para presidir este organismo fue de-

signado el doctor Eduardo Casanova, encontrándose instaladas provisoriamente las oficinas del censo en el edificio de Avenida de Mayo 760, 5º piso, Capital Federal. Por el mismo decreto censal se dispone el funcionamiento de un Consejo Asesor Honorario, integrado por representantes de las Provincias, incluidas en el área a censar; de las Universidades Nacionales, de los Ministerios y grandes reparticiones, que deberán actuar concertadamente para llevar a buen término los objetivos contemplados dentro de los grandes lineamientos del citado decreto.

Particular importancia han concedido las universidades a este problema designando como representantes ante el Consejo Asesor a destacados especialistas en las ciencias del hombre. Por la Universidad Nacional de La Plata, lo ha sido el doctor Armando Vivante, Profesor de Etnología y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto del Museo; por la Universidad Nacional de Nordeste, el Director del Instituto de Antropología de la Facultad de Humanidades, profesor Eldo Serafín Morresi; por la Universidad Nacional del Sur, el Profesor Rodolfo M. Casamiquela y por la Universidad Nacional de Cuyo, el Director del Instituto de Arqueología y Etnología, Dr. Juan Schobinger; faltando designar los representantes de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, de Tucumán y del Litoral.

En esta etapa previa a la realización del censo se han determinado las áreas de trabajo, de acuerdo con lo estipulado por el texto del decreto, organizándose la futura recopilación de datos a través de la confección de fichas que contemplen las peculiaridades de las comunidades aborígenes ubicadas en las distintas zonas.

En orden de una economía de esfuerzos se ha decidido utilizar los trabajos ya efectuados o en curso en algunas provincias sobre la base de los cuales se adelantarán las tareas de ubicación cartográfica de las comunidades en la forma más precisa posible, para asegurar el relevamiento sobre el terreno dificultado por la existencia de grupos indígenas que poseen escaso arraigo, sobre todo en el área N.E.

Finalmente se ha determinado unificar los procedimientos prácticos de la encuesta, realizando un cursillo previo de adoctrinamiento con el personal censista que establezca uniformidad en el "modus operandi" necesario para evitar los inconvenientes derivados de la acción de los mismos en las comunidades, complementando estos recaudos previos con la adopción de una guía normativa para la acción de los mismos.